

# Activistas denuncian hostigamiento por parte del alcalde Juan Paradas en Yaracuy

La organización de DDHH Provea denunció la tarde de este viernes 17 de enero la persecución y hostigamiento contra activistas de Con Venezuela en Yaracuy. Se trata de Judith Yépez, abogada y su esposo Germán Aponte.

La organización compartió un vídeo donde Yépez indica que ha sido víctima de una campaña de acoso y criminalización por parte del Conas, así como de las detenciones arbitrarias de su hijo Carlos Aponte y su sobrino Germán Antillano.

“Judith y Germán son activistas de Voluntarios Con Venezuela y han enfrentado hostigamiento por su labor, tras haber denunciado abusos de Juan Manuel Paradas, alcalde del municipio Peña en el estado Yaracuy”, señala Provea en la red social X.

La organización indica que desde las protestas postelectorales en 2024, Judith exigió justicia por el asesinato de un joven manifestante, lo que derivó en que el alcalde del municipio Peña, Juan Paradas, liderara campañas públicas de estigmatización en su contra. El 8 de enero de 2025, tras un programa radial del alcalde, el Conas publicó un flyer señalándolos de “terrorismo” y “conspiración”.

Al día siguiente, jueves 9 de enero, funcionarios del Conas allanaron y vandalizaron las viviendas de la familia en Yaritagua, llevándose a Carlos Aponte, estudiante de Economía, y a Germán Antillano, chef, bajo amenazas y sin orden judicial. Ambos fueron trasladados a Caracas, imputados sin pruebas, y se les dictó prisión preventiva en la sede del Conas en San Felipe, refiere Provea.

“La familia denuncia que durante los allanamientos se cometieron robos de bienes personales, documentos y equipos electrónicos, además de intimidaciones. Las acciones buscan forzar la entrega de Judith y Germán Aponte, quienes permanecen resguardados para proteger su integridad”, advirtió la organización.

Judith Yépez exigió la liberación inmediata de Carlos Aponte y Germán Antillano, “víctimas de un proceso injusto y violaciones al debido proceso”. “En Venezuela, ser hijo o sobrino de un

activista político no es un delito”, dijo.

El hostigamiento también ha incluido el corte de electricidad a la clínica que la familia administra en Yaritagua, afectando su sustento y el servicio médico a la comunidad. “Exigimos justicia y el cese de las agresiones contra los activistas de Voluntarios Con Venezuela y civiles que ejercieron sus derechos políticos”, recordó la organización.

Con información de TalCual